



**Pacto Internacional
de Derechos Civiles
y Políticos**

Distr.
RESERVADA*

CCPR/C/81/D/904/2000
9 de agosto de 2004

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
81º período de sesiones
5 a 30 de julio de 2004

DICTAMEN

Comunicación N° 904/2000

<i>Presentada por:</i>	Constant Joseph François van Marcke (representado por el abogado Dirk van Belle del bufete Dauginet & Co., de Amberes)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado Parte:</i>	Bélgica
<i>Fecha de la comunicación:</i>	31 de enero de 1999 (comunicación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial en virtud del artículo 91, transmitida al Estado Parte el 5 de junio de 2000 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de aprobación del dictamen:</i>	7 de julio de 2004

El 7 de julio de 2004, el Comité de Derechos Humanos aprobó el proyecto que se adjunta en el anexo como dictamen en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo en relación con la comunicación N° 904/2000. El texto del dictamen se adjunta al presente documento.

[Anexo]

* Se divulga por decisión del Comité de Derechos Humanos.

Anexo

**DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR
DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
-81º PERÍODO DE SESIONES-**

respecto de la

Comunicación N° 904/2000*

Presentada por: Constant Joseph François van Marcke (representado por el abogado Dirk van Belle del bufete Dauginet & Co., de Amberes)

Presunta víctima: El autor

Estado parte: Bélgica

Fecha de la comunicación: 31 de enero de 1999 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 7 de julio de 2004,

Habiendo concluido el examen de la comunicación N° 904/2000, presentada en nombre del Sr. Constant Joseph François van Marcke con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado Parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1. El autor de la comunicación es Constant Joseph François van Marcke, ciudadano belga, nacido el 1º de marzo de 1928. Afirma haber sido víctima de la violación por Bélgica del párrafo 1 y del apartado g) del párrafo 3 del artículo 14 del Pacto. Está representado por Dauginet & Co., bufete de abogados de Amberes.

* Participaron en el examen de la presente comunicación los siguientes miembros del Comité: Sr. Abdelfattah Amor, Sr. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati, Sr. Franco Depasquale, Sr. Maurice Glèlè Ahanhanzo, Sr. Walter Kälin, Sr. Ahmed Tawfik Khalil, Sr. Rajsoomer Lallah, Sr. Rafael Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, Sr. Martin Scheinin, Sr. Ivan Shearer, Sr. Hipólito Solari Yrigoyen, Sra. Ruth Wedgwood y Sr. Roman Wieruszewski.

Los hechos expuestos por el autor

2.1. En julio de 1988, un antiguo empleado presentó una denuncia contra el autor, que era entonces Director gerente de *N. V. Interprovinciale stoombootdiensten Flandria*, compañía naviera, por fraude fiscal y evasión del impuesto sobre la renta, con el resultado de que el ministerio público ordenara una investigación preliminar. Más tarde, el 22 de junio de 1989, el ministerio público ordenó que se pidiera información a la Oficina de Control de Impuestos. La información obtenida se reflejó en el atestado policial N° 17.375 de 17 de noviembre de 1989. En él se mencionaba una conversación con un funcionario fiscal, que había hecho una investigación sobre los impuestos pagados por la compañía en 1987 y 1988 y cuyo informe se acompañaba al atestado. Según el autor, ello se hizo en violación del artículo 350 del Código Fiscal, que dispone que los funcionarios fiscales sólo pueden declarar como testigos en procesos penales y que prohíbe su participación activa en una investigación penal. El 26 de febrero de 1990, el mismo funcionario fiscal informó al ministerio público de ciertas infracciones del Código Fiscal cometidas por funcionarios de la compañía.

2.2. El 18 de junio de 1990, tras concluir la investigación preliminar, el ministerio público formuló cargos de falsificación y fraude contra el autor y varios coacusados. El 19 de junio de 1990, el autor fue detenido e interrogado por la policía. Según el autor, el ministerio público estaba a la espera del resultado de la investigación que llevaba a cabo la Oficina de Control Fiscal sobre los impuestos pagados por la compañía. El informe de la Oficina se envió al juez instructor el 1° de abril de 1992. La causa contra el autor se remitió entonces al tribunal de primera instancia de Amberes.

2.3. Por sentencia de 30 de junio de 1995, se declaró al autor culpable de falsificación y fraude. El 28 de junio de 1996, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia recaída en primera instancia condenando al acusado a dos años de reclusión con suspensión de pena y multa de 500.000 FB.

2.4. En la sentencia, el Tribunal de Apelación rechazó la petición del autor de que se desestimara la acción penal por fraude fiscal o, subsidiariamente, de que se retirara del sumario el informe de 1989 del inspector fiscal. Confirmó las conclusiones del juez de primera instancia de que la investigación penal no se había iniciado debido a dicho informe, sino como resultado de la denuncia presentada por un ex empleado. Dado que los elementos del fraude fiscal habían sido notificados al ministerio público antes de que se le transmitiera el informe de control fiscal, el Tribunal resolvió que no había motivo para declarar inadmisibles el procedimiento penal o para retirar el informe del sumario. El Tribunal rechazó también por infundadas otras pretensiones del autor en relación con la presunta violación del derecho a un juicio justo. En particular, el Tribunal rechazó la afirmación de que el inspector fiscal hubiera participado en una investigación penal en forma alguna y concluyó que la cooperación de los funcionarios fiscales en la investigación penal no había violado en modo alguno los derechos del autor.

2.5. El 15 de abril de 1997 el Tribunal de Casación rechazó la nueva apelación del autor. Con ello se considera que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna.

2.6. El autor formuló una petición a la Comisión Europea de Derechos Humanos. El 19 de enero de 1998, la Comisión rechazó la petición del autor por considerarla inadmisibles.

La denuncia

3.1. El autor afirma ser víctima de la violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto debido a las irregularidades de la investigación preliminar: sostiene que la acusación se basó en una investigación llevada a cabo por el inspector fiscal en violación del artículo 350 del Código Fiscal entonces vigente, según el cual los inspectores fiscales sólo podían testificar en cuestiones penales y no podían participar activamente en las investigaciones penales. Según el autor, las autoridades judiciales no dictaron auto de procesamiento hasta disponer del resultado de la investigación llevada a cabo por la Oficina de Control Fiscal, y la información proporcionada por el inspector se utilizó contra él en la investigación preliminar, constituyendo el fundamento de su condena. En consecuencia, el autor afirma que la investigación preliminar y el juicio contra él no fueron imparciales, con lo que se violó el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto. Con respecto a la conclusión del Tribunal de que el inspector fiscal no había participado en la investigación penal, el autor afirma que a pesar de ello había una apariencia de parcialidad que en sí constituía una violación del párrafo 1 del artículo 14. Además, el autor afirma que la participación del inspector fiscal en la investigación preliminar contra él violaba el carácter confidencial de dicha investigación.

3.2. El autor afirma que se ha violado su derecho a la igualdad de acceso a la información, ya que el Tribunal de Apelación se negó a que el informe fiscal se acompañara al sumario, a pesar de que la investigación judicial se fundaba o tuvo su origen en las conclusiones de la investigación fiscal. El autor afirma que el ministerio público tuvo acceso al informe fiscal para conseguir información y que decidió sobre esta base el tipo de investigación que debía ordenar para conseguir pruebas contra el autor. Éste reconoce que tuvo acceso al informe fiscal durante la investigación fiscal practicada contra él pero afirma que conforme a las normas de un juicio justo, el tribunal también debía haber tenido pleno acceso a toda la información utilizada por el ministerio público.

3.3. Finalmente, el autor afirma que se violó asimismo su derecho a guardar silencio, consagrado en el apartado g) del párrafo 3 del artículo 14. Explica que en tanto que contribuyente, tenía obligación de facilitar información correcta sobre su situación fiscal durante la investigación abierta tras la presentación de la denuncia penal contra él. Estaba obligado a responder a todas las preguntas de la administración fiscal aun a riesgo de inculparse a sí mismo. De haberse negado a cooperar, podría haber sido objeto de sanciones fiscales o penales. En consecuencia, el autor colaboró plenamente con las autoridades fiscales y facilitó información. El autor afirma que "incluso a pesar de que los resultados de la investigación fiscal no se utilizaron directamente como prueba en el proceso penal abierto contra el acusado, los resultados de esta obligación de cooperar han contribuido, al menos indirectamente, a la condena del demandante". El autor afirma que ello constituye una violación de su derecho a guardar silencio, habida cuenta de que el ejercicio formal de ese derecho en el procedimiento penal era ilusorio en vista de la información que ya había facilitado a las autoridades fiscales y de que el informe del inspector fiscal se había utilizado en la investigación preliminar contra él. En ese contexto, el autor se remite a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Saunders* (17 de diciembre de 1996).

Observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al fondo

4.1. En su presentación de 5 de diciembre de 2000, el Estado Parte se remite a la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos, de fecha 19 de enero de 1998, por la que declaraba inadmisibles la petición del autor fundándose en que no había ninguna apariencia de violación. El Estado Parte subraya que la Comisión Europea entró en el fondo de la denuncia del autor y que no la rechazó por motivos de procedimiento o *ratione materiae*. En particular, el Estado Parte afirma que la jurisprudencia del sistema europeo demuestra que el derecho a un juicio justo incluye el derecho a guardar silencio, y que los derechos que observa la Comisión Europea son por lo tanto los mismos que se consagran en el Pacto. El Estado Parte sostiene, por consiguiente, que al haber sido el mismo asunto ya examinado por la Comisión Europea de Derechos Humanos, según el apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo la comunicación es inadmisibles.

4.2. El Estado Parte se refiere asimismo a la jurisprudencia del Comité en cuanto al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna, según la cual el autor debe plantear el fundamento de su denuncia ante las instancias nacionales. En este contexto, el Estado Parte observa que en su recurso de casación el autor no planteó la violación del artículo 14 del Pacto. El Estado Parte se refiere a los motivos de casación expuestos en nombre del autor, en los que se hace referencia al párrafo 1 del artículo 6 de la Convención de Derechos Humanos y al artículo 149 de la Constitución (obligación de fundamentar las sentencias). El Estado Parte sostiene, en consecuencia, que las pretensiones expuestas en la presente comunicación no se elevaron a los tribunales nacionales y que, por consiguiente, debe declararse inadmisibles la comunicación a tenor del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

4.3. En cuanto al fondo, el Estado Parte afirma que el expediente demuestra que el derecho del autor, reconocido por el párrafo 1 del artículo 14, a ser oído públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, se ha garantizado plenamente. Con respecto a la afirmación del autor de que se violó el artículo 350 del Código Fiscal, el Estado Parte dice que corresponde a los tribunales internos interpretar las leyes del país y examinar su aplicación y que el Comité no es competente para decidir en cuanto a una posible infracción del derecho interno que no constituya asimismo una violación del Pacto. En este contexto, el Estado Parte observa que el derecho a la confidencialidad de la investigación preliminar no se incluye en el artículo 14 del Pacto ni en el artículo 6 del Convenio Europeo.

4.4. Por lo que se refiere a la denuncia del autor de que el juicio no fue justo, el Estado Parte se remite a las conclusiones de la Comisión Europea en el caso del autor, que consideró que éste tuvo plena oportunidad de exponer todos sus argumentos ante los tribunales internos, en particular en cuanto a la presunta participación activa del inspector fiscal. En opinión de la Comisión Europea, el hecho de que el autor disienta de las conclusiones del tribunal a este respecto no demuestra por sí sólo que el juicio contra él no fuera justo. El Estado Parte coincide plenamente con el punto de vista expresado por la Comisión Europea.

Comentarios del autor

5.1. En su carta de 14 de junio de 2001, el autor comenta las observaciones del Estado Parte en cuanto a la admisibilidad de la comunicación. En respuesta al argumento del Estado Parte de que la comunicación es inadmisibles conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del

Protocolo Facultativo, el autor señala que la Comisión Europea de Derechos Humanos rechazó su solicitud por decisión de 19 de enero de 1998 y que, en consecuencia, el asunto ya no está sometido a examen bajo ningún otro procedimiento internacional de investigación o solución. Observa asimismo que el Estado Parte no ha formulado reservas para excluir de la competencia del Comité cuestiones que ya hayan quedado decididas conforme a un procedimiento de esa índole. El autor concluye, en consecuencia, que su comunicación es admisible.

5.2. En respuesta al argumento del Estado Parte de que la comunicación es inadmisibile por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna, el autor afirma que ya expuso ante los tribunales los derechos sustantivos protegidos por el artículo 14 del Pacto y que ha agotado todos los recursos disponibles a ese respecto. Se remite a la jurisprudencia del Comité, según la cual el peticionario debe exponer los derechos sustantivos protegidos por el Pacto pero no está obligado a hacerlo con referencia a artículos específicos del mismo. Concluye, por consiguiente, que ha cumplido el requisito de admisibilidad del apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

5.3. En su carta de 28 de junio de 2001, el autor comenta las observaciones del Estado Parte en cuanto al fondo de la comunicación. Con respecto al argumento del Estado Parte de que el Comité no está en condiciones de examinar la interpretación y aplicación del derecho interno, el autor dice que ha invocado el artículo 350 del Código Fiscal para sostener que la cooperación del inspector fiscal en el procedimiento penal creó al menos la impresión de una participación activa que provocó la violación de su derecho a un juicio justo e imparcial. El autor afirma también que el Tribunal de Casación fundamentó la sentencia pronunciada en su caso únicamente en la interpretación del derecho interno y que no contrastó la interpretación con ninguna norma internacional sobre el juicio justo. Afirma que corresponde al Comité decidir si las autoridades nacionales actuaron de conformidad con el Pacto a ese respecto.

Examen de la admisibilidad por el Comité

6.1. Antes de examinar las afirmaciones formuladas en la comunicación, el Comité de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 87 de su reglamento, debe decidir si ésta es o no admisible con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2. El Comité ha tomado conocimiento de la objeción del Estado Parte a la admisibilidad de la comunicación conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo. El Comité observa a este respecto que la petición dirigida por el autor a la Comisión Europea de Derechos Humanos con respecto al mismo asunto fue declarada inadmisibile por la Comisión el 19 de enero de 1998 y que, en consecuencia, ya no está siendo examinada. A falta de una reserva del Estado Parte por la que quedaría excluida la competencia del Comité para examinar comunicaciones que ya hubieran sido examinadas conforme a otros procedimientos internacionales de investigación o solución, el Comité resuelve que nada se opone a la admisibilidad de la comunicación conforme al apartado a) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.3. El Comité ha tomado asimismo conocimiento de la objeción del Estado Parte a la admisibilidad de la comunicación por no haberse agotado los recursos de la jurisdicción interna, ya que el autor no invocó el artículo 14 del Pacto ante las instancias judiciales nacionales. En este contexto, el Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que a efectos del

Protocolo Facultativo, el autor de la comunicación debe evocar los derechos sustantivos enunciados en el Pacto ante las instancias nacionales, aunque sin necesidad de remitirse a artículos específicos.

6.4. El Comité observa que el autor no planteó la cuestión de la presunta violación de su derecho a guardar silencio en sus apelaciones ante los tribunales internos. Esta parte de la comunicación, relativa a una presunta violación del artículo 14, es, pues, inadmisibles conforme al apartado b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

6.5. Observando que el autor basó su apelación ante los tribunales internos en la presunta violación de su derecho a ser oído por un tribunal imparcial e independiente y en una presunta violación de su derecho a la igualdad de acceso a la información, el Comité entiende que el autor ha agotado los recursos de la jurisdicción interna con respecto al resto de sus pretensiones.

7. El Comité, en consecuencia decide que la comunicación es admisible en la medida en que plantea cuestiones pertinentes al párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

Examen de la cuestión por el Comité en cuanto al fondo

8.1. El Comité de Derechos Humanos ha considerado la presente comunicación a la luz de toda la información que le han presentado las partes según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8.2. En cuanto a la afirmación del autor de que el inspector fiscal participó activamente en la investigación preliminar y que sus informes se utilizaron en la causa penal contra él, en violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, el Comité observa que los tribunales rechazaron la pretensión del autor a este respecto y resolvieron en cuanto a los hechos que ningún funcionario fiscal había participado activamente en la causa penal. Según la jurisprudencia del Comité, éste no está en condiciones de revisar la evaluación de los hechos por los tribunales internos. La información que obra ante el Comité y los argumentos expuestos por el autor no demuestran que la evaluación de los hechos por los tribunales fuera manifiestamente arbitraria o que representara una denegación de justicia. El autor ha sostenido asimismo que la apariencia de parcialidad constituye en sí una violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto, aun cuando el inspector fiscal no haya participado activamente en la causa penal contra él. Aun reconociendo que en determinadas circunstancias la apariencia de parcialidad puede ser de tal índole que viole el derecho a un juicio justo por un tribunal independiente e imparcial, el Comité entiende que en el presente caso los hechos no representan violación del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto.

8.3. En cuanto a la pretensión del autor de que su derecho a la igualdad de acceso a la información fue violado por los tribunales al negarse a incluir el informe fiscal en el sumario, el Comité observa que el tribunal y el autor tuvieron acceso a todos los documentos utilizados en la causa penal contra él y que el informe fiscal no había constituido el fundamento del alegato del ministerio público ante la justicia. La circunstancia de que la información suministrada por las autoridades fiscales alertó al ministerio público en cuanto a los aspectos que se podían examinar en investigaciones independientes no obligaba al ministerio público a incluir el informe fiscal en su alegato. El Comité observa que el derecho a ser oído que figura en el párrafo 1 del artículo 14 no exige por sí solo que la acusación presente al tribunal toda la información de que se haya valido en la instrucción del sumario, a menos que la no presentación de la información

disponible a los tribunales y al acusado suponga una denegación de justicia, como podría ser la retención de pruebas exculpatorias. El Comité observa que el autor no ha alegado que nada de lo que figura en el expediente fiscal hubiera sido exculpatorio. En las circunstancias del presente caso, el Comité entiende que la información de que dispone no demuestra que la negativa de los tribunales a incluir el informe fiscal en el sumario haya limitado el derecho del autor a la defensa o supuesto de otro modo una violación de su derecho a un juicio justo.

9. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que le han sido sometidos no revelan una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la inglesa la versión original. Posteriormente, se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]